

Burocracia

● En el sur de Chile, cientos de pequeños y medianos propietarios estamos atrapados en la maraña burocrática del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Lo que debería ser un trámite simple –subdividir un predio para resolver necesidades familiares o económicas– se ha convertido en un calvario: procesos que duran más de un año, observaciones sin criterio y costos que superan incluso los \$250.000 por expediente.

No hablamos de casos aislados. Hemos enfrentado problemas graves en las oficinas del SAG de Puerto Varas, Puerto Montt, Osorno, Río Bueno, Villarrica y Temuco. La interpretación arbitraria del D.L. 3.516 ha paralizado proyectos, ahogado inversiones y generado un clima de desconfianza. Hoy no solo debemos contener la molestia de nuestros clientes, sino también enfrentar demandas que se multiplican, todo por culpa de un Estado que no cumple su labor y que, en lugar de apoyar, obstaculiza el desarrollo productivo de los pequeños propietarios agrícolas.

El daño es aún mayor porque aquí no se afecta solo a los dueños de los predios. Existe un ecosistema comple-

to que depende de las parcelaciones: empresas que realizan redes de agua y pozos profundos, topógrafos, abogados, compañías eléctricas, constructoras pequeñas, maestros y trabajadores que instalan cercos y levantan viviendas en los loteos. Hoy todos ellos se encuentran en situación precaria, sin trabajo y sin horizonte.

Lo más indignante es la contradicción: mientras se permiten grandes desarrollos inmobiliarios en zonas rurales, a los agricultores se les niega el derecho básico de disponer de su tierra. Esa arbitrariedad destruye la confianza en las instituciones y amenaza directamente la economía local.

Chile necesita reglas claras, eficiencia y seriedad. La agricultura, el empleo local y la inversión rural no pueden seguir siendo rehenes de la burocracia ni de un gobierno que ha confundido ideología con gestión.

Gerardo Feest Rivano